

La dimensión política de la presencia en Haití: los desafíos para el ABC+U

Monica Hirst
(Universidad Torcuato Di Tella)

Elsa Llenderozas
(Universidad de Buenos Aires)

Segunda Reunión de Reflexión sobre la Cooperación Argentina con Haití
Proyecto “La Reconstrucción de Haití. Fortaleciendo las capacidades de
Argentina para una cooperación efectiva”

Buenos Aires, 7 y 8 de julio de 2008

El índice 2008 de países fallidos de la revista *Foreign Policy* indica una mejora importante del posicionamiento de Haití, que del lugar 8° en 2006 pasó a ocupar el 14°.¹ El cuestionamiento que este tipo de medición merece, además de las dificultades percibidas en el concepto de “Estado fallido,” no impide el reconocimiento del registro de progreso en la realidad haitiana, a ser entendido como resultado de la sumatoria de esfuerzos desplegados por la comunidad internacional y por la propia nación. La evaluación del primer bienio del gobierno de Préval debe incluir un conjunto de aspectos inter-relacionados, entre los cuales destacaremos el de la política.

Este texto pretende abordar dos temas que al mismo tiempo se articulan y guardan su especificidad: el carácter político de la actuación de los países sudamericanos en Haití –especialmente del Cono Sur- y la cooperación política como parte de la misión de MINUSTAH. En el tratamiento de este dos conjuntos de cuestiones se buscará subrayar sus particularidades cuando se considera la presencia de Argentina en esta misión.

En términos normativos- compartimos la idea de que la acción coordinada de la región debería ser percibida como una oportunidad de aprendizajes recíprocos que fortalezcan la capacidad colectiva de actuación en escenarios de crisis severas de gobernabilidad en el espacio latinoamericano (Hirst, 2007). La ausencia de instrumentos institucionales que operen en este sentido torna aun más prominente este tipo de preparación y compromiso. El mecanismo ad hoc 2x9 es un avance en esta dirección, aunque su agenda -hasta por una cuestión de mandato- ha estado centrada en la coordinación de posiciones y políticas, y no necesariamente en la gestión directa de crisis. (Llenderozas, 2007)

La etapa actual corresponde a la movilización de esfuerzos internacionales y haitianos para atender a una agenda de tareas concretas, que busca alcanzar: seguridad interna -particularmente en lo referido a la reforma y ampliación de la fuerza policial nacional haitiana (PNH)-, la estabilidad y cohesión política –que abarca el fortalecimiento de la autoridad estatal y el funcionamiento pleno del poder ejecutivo y el

¹http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=140

legislativo-(López, 2008), condiciones de desarrollo económico sustentables -y oferta de bienes públicos-; y la reforma del sistema judicial y penitenciario con énfasis en la protección de los derechos humanos.

A continuación se enumeran algunos aspectos puntuales que pretenden sugerir una reflexión sobre esta problemática desde una perspectiva ABC+U. Debemos aclarar que nos centraremos en el escenario haitiano a partir de la elección de René Préval. Sin embargo, identificamos la fase 2004-2006, en la cual la MINUSTAH ya operaba plenamente, como un período crucial para entender las expectativas generadas dentro y fuera de Haití.

1. La cooperación internacional –bilateral o multilateral- gana relevancia como instrumento de interacción Norte-Sur a partir de la descolonización, como una vía técnica que implica la adopción de criterios, prescripciones y métodos de control que contribuyen para ordenar una agenda de apoyo externo, especialmente en el terreno de la cooperación económica. Como se sabe la cooperación internacional no ha estado exenta de las controversias políticas Norte-Sur que han tenido mayor o menor visibilidad en los últimos 50 años (pero este no es tema de este documento).

Conceptualmente estamos abordando el tema de la cooperación en contextos de intervenciones multidimensionales (Weiss & Collins, 2000). Como se sabe, esta cooperación se produce en escenarios sustancialmente distintos a los de la cooperación internacional “clásica”. Además, en estas intervenciones, el ámbito de la **cooperación política** es ciertamente aquel que ofrece mayor dificultad de circunscribir. En cuanto los campos de cooperación en seguridad o en economía son cristalinos y dependen de una definición de agendas de tareas y el marco operativo correspondiente, la cooperación política está expuesta a situaciones difusas y tensas en las cuales la idea misma de la intervención (y sus límites) de un lado, y la cesión de soberanía del otro, **deben** ajustarse a los procesos políticos locales para los cuales están previstos. También es cierto que toda intervención externa por mayor voluntad política y recursos económico de que disponga estará condicionada por el **legado institucional** del país intervenido (Coyne, 2008).

Nuestro punto será aislar (cuanto sea posible) el terreno de la cooperación política en este tipo de operaciones, tomando en cuenta el caso de Haití. Su especificidad en relación a otras operaciones se refiere a la presencia de la región latinoamericana (en forma de coordinación inter-gubernamental), que no reemplaza pero se suma, como parte del elenco de actores que se desempeña al lado de los gobiernos del Norte (EEUU, Francia y Canadá) de la ONU y del gobierno local.

Por lo tanto, en términos políticos, la reconstrucción haitiana contempla una dinámica tridimensional que envuelve una combinación de interacciones subordinadas a negociaciones y presiones, que se desarrolla en distintos “tableros” al mismo tiempo, ya sea dentro o fuera del país. Gráficamente se sugiere una representación como la que aparece en el cuadro más abajo.

Dimensión 1	Dimensión 2	Dimensión 3
Gobierno / Sociedad Local	Instituciones Multinacionales	Estados Interventores
Ejecutivo Legislativo Judicial	ONU- NY MINUSTAH	Gobiernos Norte (Estados Unidos, Francia y Canadá) Sur (Sudamérica, et al.)
	OEA	(Actores militares y civiles)
	CARICOM	
	Consejo de Donantes	
	Banco Mundial	

	BID	
ICF		2x9
ONGs (en Haití son 750)		

* El cuadro se perfeccionará en la versión final del documento.

2. Desde el principio, el mandato de MINUSTAH dejaba en claro la complejidad de su misión, el amplio espectro de objetivos (políticos, institucionales y sociales) y la meta, en última instancia, de reconstrucción estatal y social que se plantea a futuro. Si bien la **cooperación en términos de reconstrucción política** tiene un lugar destacado en el mandato de la misión, desde la ONU se respaldaba la necesidad de construir primero un “entorno seguro”, para luego poder desarrollar el proceso político que preveía : restablecer y mantener el Estado de derecho; construir el marco constitucional adecuado a la gobernanza democrática; promover el diálogo y reconciliación nacional; organizar y asistir a las elecciones en los distintos niveles de representación; cooperar en la extensión de la autoridad del Estado por todo Haití; promover y proteger los derechos humanos.

No obstante, se torna más fácil caracterizar a MINUSTAH como una operación de intervención política en su primera parte, que en el período pos-Préval. Tanto la fundamentación y la forma de actuación del representante del Secretario General de Naciones Unidas, Gabriel Valdés, como las justificaciones de la diplomacia brasileña fueron indicadores contundentes de la motivación política de nuestros países. Como explicó Valdés, desde su inicio, el conflicto interno haitiano tuvo en la práctica **un carácter esencialmente político y solo muy secundariamente uno militar (Valdés, 2007)**. El sentido político de la intervención era interno y externo, como quedó expresado con palabras del Canciller Celso Amorin- “estamos en Haití para que no estén los norteamericanos.” Las explícitas motivaciones políticas de nuestros países no impidieron que en la formulación del mandato inicial de MINUSTAH estuviera comprometida una respuesta mayoritariamente militar, lo que abrió un nuevo horizonte de controversias para nuestras democracias.

A partir de 2006 la dimensión política de la MINUSTAH se torna más sutil, porque debe respetar la recuperación de la soberanía política de Haití, de sus propias instituciones y particularidades en términos de cultura política, y desenvolver una agenda más técnica de cooperación (Hirst, 2007; Llenderozas, 2007; Torchiaro, 2007). Al mismo tiempo, la idea fuerza de que participar en la MINUSTAH corresponde a una acción entre democracias para “transmitir” democracia, debía mantenerse para legitimar internamente la presencia externa en Haití, lo que dicho sea de paso era también parte de las demandas concretas de Préval. Como presidente electo, en su visita a la región, solicitó a los gobiernos de Argentina, Brasil y Chile su apoyo para la elaboración de un plan de desarrollo y de fortalecimiento institucional y político de su gobierno, como una forma de cooperación sur-sur, basada en la cooperación técnica y en la transmisión de experiencias que fueron efectivas en nuestros países en momentos críticos. Se identificaron grandes lineamientos de acción: fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; atención de la emergencia social; establecimiento de una economía viable (infraestructura, producción, energía).

En este cuadro, si bien la MINUSTAH es la décima experiencia de intervención externa en Haití, nunca antes fue tan compleja y ambiciosa la acción “de los de afuera” para construir un tejido básico de condiciones de gobernabilidad en este país. El papel de nuestras fuerzas armadas en Haití nos otorga el monopolio de la fuerza en un contexto de reducido margen de acción política. Debemos equilibrar el impacto de nuestra presencia militar con la acción humanitaria, lo que aumenta la aceptación de esta presencia por la población local pero no aumenta necesariamente nuestra capacidad de influencia política. Los reparos son aún mayores cuando se interpreta esta influencia como un esfuerzo para transmitir cultura política y experiencia democrática en un proceso político que presenta notables complejidades.

Hoy por hoy, la gobernabilidad en Haití involucra definiciones sobre el sistema representativo para poderes locales y centrales, la realización o no de una reforma constitucional, el funcionamiento del sistema judicial, la vigencia de mecanismos de transparencia de las instituciones oficiales además de estar sujeto a un diálogo interpartidario amplio y constructivo(López, 2008, Gauthier,2008, Esperon, 2008). Debemos

aclarar que la preocupación que expresamos acá no se refiere a la capacidad de intervención de nuestros países sobre esta realidad pero si a su habilidad para **conocer, entender y articular percepciones comunes** frente a esos desafíos que permitan ofrecer un parámetro a la sociedad haitiana. En este caso algunas dificultades merecen ser subrayadas:

a) Político-institucionalmente la democracia haitiana opera como un sistema semi-presidencialista. Los procesos de democratización de nuestros países han respetado y profundizado la tradición presidencialista de nuestras vidas republicanas. Nuestros países no tienen una trayectoria parlamentarista, y más aún, los parlamentos suelen tener un rol bastante débil y en algunos casos hasta subordinado al poder ejecutivo, lo que limita la política de transferencia de capacidades y experiencias democráticas en este sentido. De hecho en los países del ABC+U la capacidad de diálogo entre los poderes es un proceso de aprendizaje reciente y desigual.

Se debe admitir aún que las perforaciones de la democracia haitiana son muy semejantes a las nuestras pero en una forma exacerbada. Prescribir soluciones para la dimensión ética de las responsabilidades públicas resulta problemático cuando aún enfrentamos este problema en nuestros propios procesos de consolidación democrática, y en consecuencia, esto exige una alta dosis de prudencia.

Por otra parte, el funcionamiento del sistema político haitiano corresponde –en términos virtuales- a un solapamiento de atribuciones y responsabilidades que exige un proceso permanente de negociaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo, sumado a un ordenamiento jurídico que en este momento se encuentra en estado de disfunción.

b) También se debe tener presente la fragilidad de la base política del gobierno de Préval desde el primer momento, lo que es aceptada y legitimada por los gobiernos del ABC.

Además de las interpretaciones aún confusas sobre la interrupción del gobierno constitucional anterior, nos referimos a la solución legal encontrada en ocasión de las elecciones presidenciales para evitar una segunda vuelta y reconocer la victoria del candidato de Plataforma Esperanza. Esta fragilidad, si bien atenuada, no fue superada en dos años, como lo demuestra el vacío político generado por las dificultades de sustituir al primer ministro, después de la crisis de abril de este año.

c) Los actores políticos y los gobiernos de nuestros países tienen baja convivencia con las diásporas haitianas²; que se han asentado fundamentalmente en Canadá, Estados Unidos y Francia. En los tres casos las comunidades haitianas son actores políticos con influencia en las agendas bilaterales con Haití, algo que no sucede en ninguno de los países sudamericanos. Las agrupaciones haitianas de esos países mantienen fuertes lazos con familiares y amigos que permanecen en Haití y han podido impulsar muchos de los proyectos que obtuvieron apoyo internacional. En Canadá, por ejemplo, la mayoría de los haitianos están en Quebec y Montreal y constituyen un actor organizado que ha logrado el apoyo del gobierno canadiense para el financiamiento de planes de ayuda en áreas de gobernabilidad democrática, seguridad, justicia y desarrollo económico-social (Barany, 2007) De manera que la diáspora constituye en sí mismo un vaso comunicante clave entre la agenda interna haitiana y los actores externos, un fenómeno del que carecen los países sudamericanos.

3. La limitada disposición de recursos económicos provenientes de nuestros países, comparada con los flujos provenientes de los países del Norte, reduce la capacidad de influenciar políticamente el proceso interno haitiano y nos limita fundamentalmente al terreno de la cooperación técnica.

Es necesario subrayar que existe en la dimensión inter-democrática de nuestra presencia en MINUSTAH, una asimetría entre la importancia relativa de la cooperación política y otros campos de apoyo externo. El éxito de una intervención para el

² Alrededor de tres millones de haitianos viven en el exterior; casi un 25% de los haitianos oficialmente reconocidos.

fortalecimiento de la democracia en Haití implica una fórmula que incluye el apoyo a la estructuración del Estado, a la organización de la economía y la construcción del tejido social. En este sentido, nuestra presencia en Haití no debe reducirse a su expresión militar, lo que sería una contradicción absoluta con la argumentación que nos llevó para allá.

4. Nuestro compromiso con Haití viene suscitando distintos proyectos en áreas de cooperación económica, socio-ambiental y cultural (Valler Filho, 2007). Pero existe un campo específico de cooperación político-institucional relacionada al aparato político y al sistema judicial, conducida esencialmente por los gobiernos canadiense y norteamericano, cuya actuación como poderosos donantes, está desplegada a través de instrumentos de control sobre sus áreas de acción. Si bien MINUSTAH ha tenido su papel en cuanto al fortalecimiento de las autoridades centrales y locales, y ha estado trabajando en la mejora del sector judicial y del sistema penitenciario, tanto el gobierno de Estados Unidos, a través de USAID como el de Canadá -segundo donante bilateral más grande que tiene Haití- han desplegado vastos proyectos dirigidos a las estructuras políticas locales para desarrollar capacidades de gestión y administración más transparentes, así como programas orientados a la reforma integral del sistema judicial y penitenciario (Esperon, 2008). Por otra parte, organismos como el Banco Mundial y el BID, han tenido fuerte influencia política y económica, al sostener iniciativas de reforma del sistema fiscal y de gobernanza económica.

5. La tensión política interna en Haití deja en evidencia la dificultad de contener la realidad haitiana – sus presiones sociales- en un marco de cooperación internacional, que obedece más a criterios técnicos establecidos externamente, subordinados a cronogramas y evaluaciones multilaterales. Cada escenario de crisis como el que se observó en abril de este año profundiza la disociación entre ambas dimensiones. Esta situación es agravada por el hecho de que el proceso de desarme avanzó a pasos más lentos de lo que se preveía, lo que implica un nivel de violencia latente aún riesgoso, que puede llevar a nuevos escenarios de escalada. Los episodios recientes estimulados por el alta de los

precios de los alimentos fueron ilustrativos. Nuestros países, que disponen de recursos limitados para la cooperación técnica, están más expuestos a esta presión.

6. Cuando analizamos la dimensión política de nuestra presencia en Haití, debemos tener en cuenta la vinculación de la actuación de las fuerzas armadas sudamericanas con la cuestión de las relaciones cívico-militares, tan relevante en los procesos democráticos de la región. Este es un aspecto que puede condicionar la cooperación política. Como sabemos, las operaciones de paz son fuente de prestigio y recursos para las fuerzas armadas y al mismo tiempo constituyen un nuevo instrumento de articulación entre política exterior y defensa (Hirst, 2007). Pero los ministerios de defensa de los países sudamericanos ya han identificado sus propias agendas en la MINUSTAH, vinculadas con la naturaleza de sus recursos materiales y humanos y con sus objetivos políticos internos, de manera que parece importante evitar que éstas puedan ganar gravitación propia, neutralizando otras iniciativas de carácter político.

En todos los casos la participación en la MINUSTAH es percibida como un instrumento valorado para mejorar el profesionalismo y sentido de misión de las fuerzas armadas. Por supuesto que el esfuerzo de acercamiento a la población local para diluir la imagen de ocupación, es prioritario para nuestros gobiernos, de la misma forma que se tornó un objetivo común- expreso en las últimas resoluciones del 2X9 – aumentar las actividades de carácter civil en las tareas que se desarrollan en Haití. Lo que debe evitarse es que esta presencia militar vuelva a politizar la agenda civil-militar de nuestras democracias. Hoy por hoy, reducir de forma sustantiva nuestra presencia militar en Haití, para iniciar una transición a mecanismos de cooperación en el plano político, económico o social, será un tema de negociación con las fuerzas armadas.

7. La dimensión latinoamericana presente en la actuación de la MINUSTAH, que se ha trasladado al actual proceso haitiano, tiene sus especificidades con respecto a otros escenarios de reconstrucción político-institucional también vinculados a entornos regionales. Si tomamos el caso de Kosovo, la “tutoría” pretendida por la UE otorga un marco institucional que condiciona y sirve como factor de coerción para que las nuevas

autoridades locales cumplan agendas económicas, políticas y de seguridad. En el caso de los países africanos la preocupación central es asegurar la paz, los esfuerzos están muchas más dirigidos al proceso de pacificación que a la construcción de un estado de derecho. Pero, tanto la Unión Europea como la Unión Africana disponen de voluntad política, y en consecuencia de mandatos claros en este sentido.

En cambio, los países latinoamericanos actúan de forma fragmentada en Haití, en distintos planos multilaterales, regionales y subregionales. Esa fragmentación se manifiesta en las contribuciones puntuales (crecientemente importantes) de la OEA, en los vaivenes del accionar de CARICOM -marcado por desconfianzas recíprocas con Haití- en la membresía simbólica en el Grupo de Río³, el vínculo con el ALBA, el revival concertacionista del 2x9 – el mecanismo que gana mayor visibilidad política-y el diálogo político ABC. La acción más coordinada se concentra principalmente en el campo militar, en el marco del multilateralismo efectivo de la ONU.

En este contexto de fragmentación de la iniciativa política, nos preguntamos por qué no existen proyectos de cooperación técnica conjuntos en Haití, principalmente intra ABC+U, lo que significaría fortalecer la vía no-militar de una presencia coordinada en este país. Creemos que esta coordinación podría ser especialmente relevante en las tareas de construcción de “estatalidad” en el contexto haitiano.

8. Si bien nuestra participación en el plano de la cooperación política propiamente dicha - reforma judicial y del sistema carcelario, cumplimiento del calendario electoral-, es menor de lo que se da en el caso de los donantes del norte-EEUU, Francia y Canadá- nos parece relevante que coordinemos posiciones comunes con respecto a la agenda política del país. El punto común es la visión compartida sobre el modelo de democracia, comprometido con el fortalecimiento del Estado y la creación de una capacidad de gestión para el desarrollo de políticas sociales. Este no es un aspecto menor teniendo en

³ La incorporación de Haití se concretó en la XX Cumbre de Jefes de Estados y de Gobierno del Grupo de Río realizada en Santo Domingo, en marzo de 2008.

cuenta que los modelos democráticos en las agendas de reconstrucción pos-bélica en otros casos, no siguen necesariamente este tipo de orientación.

Lo que se desea argumentar es que en el amplio espectro de posibilidades de reconstrucción pos-bélica (rótulo poco indicado para caracterizar el caso haitiano) se proyectan opciones políticas diferentes cuando se comparan los procesos en curso custodiados multilateralmente. Tal vez el aspecto más relevante del vínculo político entre Haití (el gobierno de Préval) y los países latinoamericanos, esté sellado por su interés en mimetizarse con los modelos políticos actuales de la región. La preocupación compartida de que este modelo esté más asociado al desarrollo sustentable, que a una receta neo-liberal, diferencia la experiencia haitiana de la de Afganistán o del mismo Timor del Este. De hecho, la visión crítica del neoliberalismo de los años noventa y el “revisionismo” del modelo de desarrollo económico basado en sus preceptos, constituye hoy día el punto convergente de gran parte las democracias sudamericanas (Perez Llana, 2007; Hershberg, 2008).

9. La proyección de un modelo democrático regional depende de que se profundicen la comunicación del compromiso de los actores políticos de nuestros países con el proceso haitiano. En este sentido, es diferente en esta etapa, de lo que fue al principio la agenda de nuestra clase política que actúan domésticamente para sostener la continuidad del compromiso con la MINUSTAH. En la fase anterior (2004-2006) el contenido de este apoyo se centraba en un dilema hamletiano: estar o no estar en Haití, y en toda la discusión referida al carácter de la intervención. En los cuatro países la anuencia parlamentaria se hizo necesaria para mantener el envío de contingentes militares y respaldar políticamente la operación.

Actualmente, por las características de la nueva fase, esta presencia regional involucra otro tipo de trabajo político desde el ámbito legislativo, y abre oportunidades nuevas para la transmisión de experiencias concretas que ayuden a la germinación de una cultura democrática en suelo haitiano. ¿Las iniciativas recientes de senadores chilenos y

brasileros serían una primera señal en esta dirección? ¿Podría avanzarse en el campo de la cooperación interparlamentaria con Haití?⁴

Conviene mencionar que existen otras iniciativas semejantes que se vienen desarrollando, impulsadas por parlamentarios canadienses, a través de la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía, lo que podría incluso estimular una línea de cooperación inter-democrática triangular. Esta opción también podría fortalecerse por un contacto más directo con la diáspora haitiana especialmente activa en Québec.

10. La ausencia de Argentina de la iniciativa parlamentaria chileno-brasileña no deja de ser un indicador del estado de la cooperación política de la región hacia Haití. Se considera que Argentina es el país que mostró mayor sensibilidad política desde la etapa inicial de la cooperación en la MINUSTAH, por lo cual las razones para su presencia militar son más frágiles y merecedoras de más cuestionamiento interno vis a vis sus vecinos. (Hirst, 2007, Llenderozas 2007)

En Argentina, la discusión sobre el rol de los militares en Haití estuvo asociada al debate interno de su participación en tareas de seguridad interior. Estos cuestionamientos se sumaron a otros referidos al tipo de misión, a los recuerdos de la vinculación entre la participación en Operaciones de Paz y la política de estrecha cooperación con Estados Unidos de los años 90 y al carácter mismo de la intervención política (que sigue siendo cuestionada por los sectores de la oposición interna, como se refleja en los debates parlamentarios del año 2006).

Lo paradójico es que en comparación con el resto de los actores del Cono Sur, Argentina es el que tiene más experiencia en el terreno haitiano, porque tuvo una activa participación en las otras misiones anteriores. De hecho, envió efectivos militares o

⁴ Nos referimos a la reunión realizada en Brasilia durante el mes de junio entre senadores que integran las comisiones de Asuntos Exteriores de Chile y Brasil para discutir sobre el futuro de la misión MINUSTAH.

policía civil a tres de las cuatro misiones anteriores de ONU en Haití. Y además tuvo una labor diplomática destacada a través de la actuación de Dante Caputo como Representante Especial del Secretario General entre 1992 y 1994. Eso le otorga un capital político en términos de aprendizaje y experiencia en el ámbito político haitiano. Sin embargo, a pesar de esas capacidades, el país carece de experiencia en instrumentar formas de cooperación política bajo misiones de nation building.⁵

El compromiso en la etapa inicial de la misión fue el resultado de un proceso decisorio lento que logró superar las dudas iniciales del gobierno. Esta débil voluntad política inicial no fue reemplazada por el despliegue de estrategias de legitimación de la participación de las fuerzas armadas en la misión (ni en Haití ni en ninguna otra misión en curso). El compromiso del estado se concentra en la Cancillería y en el Ministerio de Defensa, aunque existe la intención de articular una acción más integral, en sintonía con la visión común de la región, de que el éxito de la participación en Haití requiere una gradual transfiguración, desde la dimensión militar para garantizar la seguridad, hacia formas de apoyo al desarrollo económico y social haitiano.

Habría que considerar que, en el plano doméstico, la cooperación política es un tema que podría generar menos rechazo que la permanencia militar. A nivel parlamentario, por ejemplo, parecería existir consenso sobre la conveniencia de una transición del carácter de la misión, de su contenido militar hacia otras formas de cooperación más asociadas al desarrollo y al fortalecimiento del estado y la autoridad política haitianos. Pero también se sabe que un compromiso que implique mayores recursos genera inmediatamente debate político de por qué no utilizar esos recursos para cubrir necesidades internas. Estas argumentaciones toman fuerza cada vez que se desestabilizan las condiciones económicas y sociales del país.

Otra debilidad de Argentina en cuanto al despliegue de estrategias de cooperación política, se presenta en el plano institucional. Como lo demuestra la actual situación

⁵ Una buena síntesis de la discusión académica y del estado del arte sobre esta cuestión puede verse en Call & Counsens, (2008)

política, la institucionalidad aún revela un atributo deficitario en términos domésticos lo que compromete a un proyecto de exportar capacidades al contexto haitiano. Además, el modelo político haitiano requiere una cooperación que apunte no sólo a fortalecer la autoridad del ejecutivo (y sus capacidades) sino también al poder legislativo de ese país, y en este campo la tendencia hiperpresidencialista de la política argentina tampoco constituye un factor favorable.

Como se dijo, la cooperación política es por su naturaleza más sensible que en los otros ámbitos. Por tal razón, un proyecto de cooperación política en Haití requiere de consensos en el plano interno de más largo plazo, y necesita ser parte de una estrategia de inserción regional e internacional clara y consistente. Los consensos obtenidos en el marco del 2x9 deberían constituirse en puntos de partida para la cooperación técnica y política, y traducirse en líneas de acción concretas donde aplicar las experiencias políticas de la región.

Referencias

- Barany, Stephen. (2007) “Canadá en Haití: Aplicando el enfoque 3D en un Estado frágil”. *Pensamiento Propio* 25 Enero-Junio. Año 12
- Call, Charles & Cousens, Elizabeth (2008) “Ending Wars and Building Peace: International Responses to War-Torn Societies”, *International Studies Perspectives*, Vol. 9, Issue 1, February.
- Coyne, Cristopher J. (2008) “After War: The political Economy of Exporting Democracy” Stanford University Press.
- Esperón, Mercedes. “Haití: Construcción de la Gobernabilidad”. Tesis de Grado, Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales, Universidad Torcuato Di Tella. Junio 2008.
- Gauthier, Amélie “Haiti:Las Voces de los actores” FRIDE, Doc. De Trabajo Madrid, Enero 2008
- Gonnet, Diego y Hernández, Diego (2007) “La participación uruguaya en misiones de paz, una herramienta de inserción subestimada”, *Cuadernos del CLAEH*, 2da. serie, Año 30. 1-2

Hershberg, Eric (2008) “América Latina fragmentada. Economía y empleo en la era de la globalización” *Nueva Sociedad*, Nro 214. Marzo-Abril

Hirst, Monica (2007) “La intervención sudamericana en Haití”. *FRIDE Comentario*. Abril 2007

Hirst, Monica (2003) “Seguridad regional en las Américas”, en Wolf Grabendorff (ed.) *La seguridad regional en las Américas. Enfoques críticos y conceptos alternativos* , Fescol-Cerec. Bogotá.

Llenderozas, Elsa (2007) “Argentina, Brasil y Chile en la reconstrucción de Haití: intereses y motivaciones de la participación conjunta” *Pensamiento Propio*, 26, Julio-Diciembre. Año 12.

López, Ernesto (2008) “Estado, democracia y política en Haití: realidades y perspectivas”, ponencia presentada en la Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Haití Proyecto “La Reconstrucción de Haití. Fortaleciendo las capacidades de Argentina para una cooperación efectiva” organizada por FLACSO-Argentina y CRDI/IDRC Buenos Aires, 29 de Febrero de 2008

Marten, Kimberly Zisk(2004) “Enforcing the Peace. Learning from the Imperial Past”, Columbia University Press.

Micha, Luciana (2005) “Una visión integrada de la participación argentina en MINUSTAH”, *Security and Defense Studies Review*, 5 (1):1-21.

Pérez Llana, Carlos (2007) “Modelos políticos internos y política exterior” en *Foreign Affairs en español*, Vol. 7, Nro 4.

Torchiaro, Luciana(2007) “Minustah: Una Decisión Estratégica con Implicancias Regionales”. Tesis de Maestría. Maestría en Estudios Internacionales, Universidad Torcuato Di Tella. Julio 2007.

Valler Filho, Wladimir, (2007) *O Brasil e a Crise Haitiana. A Cooperação técnica como instrumento de solidariedade e de ação diplomática*. Fundação Alexandre de Gusmão. Ministerio de Relaciones exteriores de Brasil. Brasilia

Weiss, Thomas & Collins, Cindy (2000) *Humanitarian Challenges & Intervention, Dilemmas in World Politics*. Westview Press, Boulder.

Valdés, Juan Gabriel.(2007) “La Minustah y la Reconstrucción Política de Haití” en Monica Hirst, (comp.) *Crisis del Estado, Gobernabilidad Internacional y Seguridad*. Edhasa: Buenos Aires, en imprenta